



# ***DERECHOS HUMANOS: ¿RETÓRICA POLÍTICA O REALIDAD JURÍDICA?***<sup>1</sup>

---

*Benito de Castro Cid*

Cuando me propuse delimitar y concretar los términos en que podría plantear mi breve contribución al análisis del tema general asignado a la sesión de esta tarde, advertí de inmediato que, en realidad, el proceso de reconocimiento de los derechos humanos ha consistido siempre en un lento descenso desde la brumosa sierra nevada de la filosofía política hasta la amplia y soleada vega de los ordenamientos jurídicos positivos. Por tanto, entendí también que mi cometido debía ceñirse al compromiso de llamar la atención sobre la idea de que los derechos humanos han estado permanentemente vinculados a los dos extremos de la disyuntiva: la retórica política y la realidad jurídica.

Intentaré mostrarlo muy brevemente a continuación. Pero no sin hacer antes dos pequeñas matizaciones.

Una primera es que voy a dar por supuesto que, salvo un posible y muy escaso número de indecisos, todos los que estamos aquí tenemos alguna de estas dos convicciones básicas:

1. Texto utilizado como base de la *comunicación* que presenté el 29 de noviembre de 1999 en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, de la Universidad de Granada, dentro del marco general del Ciclo de Conferencias “El legado de un siglo”, en Seminario compartido con R. Dahrendorf (ponente) y J. J. Toharia.

*Convicción A:* en sentido propio, no hay Derecho fuera de la sociedad políticamente organizada (“Estado”, en sentido no estricto). En otras palabras, el Derecho se identifica con las normas creadas y respaldadas por un poder político que sea lo suficientemente fuerte como para garantizar su cumplimiento;

*Convicción B:* el Derecho es una realidad inherente a la existencia humana racional (es decir, comunicativa). Por tanto, la dimensión de lo jurídico (juridicidad) desborda los límites cronológicos y espaciales de cualquier tipo de organización política (“Estado”, en sentido no estricto).

Pues bien, dado que, dentro del debate sobre el carácter últimamente definitorio de los derechos humanos, no resulta posible estar avecinado al mismo tiempo en convicciones tan alejadas como las dos mencionadas, la opción que presentaré finalmente como más razonable no podrá coincidir más que con uno de los dos puntos de vista que, según he supuesto, dividen las convicciones básicas del auditorio. Y eso quiere decir que, inevitablemente, terminaré apostando por una respuesta que resultará muy poco atractiva para muchos de ustedes. Les presento, por tanto, las pertinentes disculpas.

La segunda matización previa que considero necesario hacer afecta ya al propio sentido o alcance de la pregunta que se nos ha planteado como objeto de reflexión de esta jornada: “Derechos Humanos: ¿retórica política o realidad jurídica?”. En mi opinión, este enunciado encierra una notable ambigüedad que, sin duda, ha sido propiciada por los organizadores con la expresa intención de provocarnos. Por eso resulta imprescindible clarificar desde el principio, antes de comprometerse con alguna de las posibles respuestas, las diferentes implicaciones de esa ambigüedad.

Cuando se intenta responder a la pregunta por el carácter retórico-político o estrictamente jurídico de los derechos humanos, es obligado plantear una distinción inicial que va a condicionar todas las reflexiones posteriores: los propios derechos humanos, por una parte, y los textos o documentos en que tales derechos

son proclamados y reconocidos, por otra. ¿Sobre cuál de las dos realidades proyectamos la pregunta? En otras palabras, ¿cuál es el carácter que se pretende determinar: el de los derechos mismos o el de los documentos en que han sido proclamados esos derechos?

La distinción es sin duda importante porque no parece posible formular una respuesta que sea igualmente válida para ambas realidades. Y, en consecuencia, ha de actuar como punto de partida y como hilo conductor de mi parca contribución de esta tarde a la tarea común de aclarar si los derechos humanos son una realidad jurídica o son más bien una mera retórica política. Analizaré, por tanto, esas dos realidades de forma separada.

## 1. EL CARÁCTER DE LOS DERECHOS HUMANOS: ¿RETÓRICA O DERECHO?

Se comprende de inmediato que la posible respuesta a esta pregunta está mediatizada por las dos opciones radicales que, como en el caso general del Derecho, pueden adoptarse en relación con la problemática particular de los derechos humanos: la explicación iusnaturalista (“lato sensu”) y la explicación iuspositivista (también “lato sensu”).

a) Dentro de la óptica de las concepciones iusnaturalistas, los derechos humanos son por sí mismos realidades propiamente jurídicas, en cuanto exigencias, facultades o poderes que son naturalmente inherentes a los seres humanos y que, en consecuencia, tienen una existencia previa a la organización jurídico-política de la sociedad; son realidades jurídico-naturales<sup>2</sup>. Por tanto, las

2. En expresión de A. OLLERO (“Cincuenta años de derechos humanos. ¿Exigencias jurídicas o exhortaciones morales?”, *Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada*, 3ª época, nº 2, 1999, p. 631), “derechos pre-positivos”.

declaraciones en que son proclamados esos derechos tienen un carácter meramente testimonial o constataivo; son simple discurso jurídico-político, pura retórica, aunque prestan la gran utilidad de poner la existencia de los derechos delante de los ojos de todos los ciudadanos, sean gobernantes o súbditos<sup>3</sup>. Y, en esa medida, tales documentos de reconocimiento son como las señales de tráfico que anuncian la presencia de una curva o de un estrechamiento de la calzada. Aunque la curva y el estrechamiento forman ya parte de la realidad de esa calzada, es útil y hasta necesario colocar una señal anunciadora que despierte la atención de los posibles conductores distraídos.

b) Por el contrario, dentro de la óptica de las concepciones iuspositivistas, los derechos humanos son constituidos como realidades jurídicas por las propias normas que los proclaman y regulan su ejercicio, no teniendo, por tanto, existencia ni contenido

Soy consciente de que esta caracterización tiene, en la actualidad, bastante mala prensa, por efecto sin duda de la incesante alternancia de las modas y paradigmas científico-filosóficos, pero creo que sigue siendo acreedora de la gran respetabilidad que se le reconocía generalmente en el pasado. No debe olvidarse que, en el proceso histórico de reconocimiento de los actuales “derechos humanos”, hubo una brillante etapa primera en la que estos derechos fueron afirmados clara y taxativamente como “derechos naturales” por el iusnaturalismo racionalista-contractualista. Más tarde, tras su destierro doctrinal en los dominios de los “derechos públicos subjetivos”, la filosofía política humanista recuperó la vieja herencia de los “derechos naturales del hombre” a través de la categoría de los *derechos humanos*, mediante el recurso al paradigma de la dignidad o preeminencia jurídica de los individuos en cuanto hombres.

3. Esa parece ser precisamente la función que asignaban a su *Declaración* los constituyentes franceses de 1789 cuando proclamaron: “Los representantes del pueblo francés, constituidos en Asamblea Nacional, considerando que la ignorancia, el olvido o el menosprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de las desgracias públicas y de la corrupción de los gobiernos, han resuelto exponer, en una declaración solemne, los derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre, a fin de que esta declaración, constantemente presente para todos los miembros del cuerpo social, les recuerde sin cesar sus derechos y deberes”.



jurídico alguno al margen de esas normas<sup>4</sup>. Así pues, antes de su incorporación a los ordenamientos jurídicos histórico-positivos, tales pretendidos derechos no son más que simples palabras vacías dentro de un discurso jurídico-político que confunde los deseos con la realidad. En cambio, sí constituyen una realidad plenamente jurídica las normas de reconocimiento que son establecidas por el legislador estatal según todos los requisitos exigibles para su validez; y esas normas son las que dan existencia jurídica a los propios derechos humanos que reconocen y garantizan.

¿Cuál de estas dos explicaciones tiene mayor grado de razonabilidad?

Yo he llegado a la conclusión de que la lógica interna del ideario de los derechos humanos exige que estos derechos sean entendidos como posiciones jurídicas que los hombres ocupan (o tienen) dentro del orden de la juridicidad transhistórica<sup>5</sup>. Conse-

4. J. BENTHAM opuso ya esta crítica radical (en su conocido escrito *Anarchical Fallacies; being an examination of the Declaration of Rights issued during the French Revolution*) a los derechos proclamados por los revolucionarios franceses de 1789. Según él, no hay ningún derecho donde no existen leyes positivas establecidas por un Estado; los llamados “derechos naturales del hombre” son una simple contradicción o sinsentido jurídico.

Este ideario positivista, opuesto a la caracterización de los “derechos naturales” pero receptivo a la idea (al espíritu de la idea) de tales derechos, desarrolló sistemáticamente la categoría de los “derechos públicos subjetivos” como pretensiones de los ciudadanos-súbditos, que su respectiva posición jurídica les permitía ejercitar frente al Estado en virtud del compromiso o autovinculación que éste había asumido al configurar tales posiciones (ver, por ejemplo, los escritos de Gerber, Laband, Mayer o Jellinek). Posteriormente, la misma inercia positivista abrió el camino hacia la dimensión o “vertiente institucional” de los derechos fundamentales, siguiendo derroteros un tanto sinuosos, tal como se desprende de la referencia hecha por P. HÄBERLE en “Los derechos fundamentales en el espejo de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán. Exposición y crítica” (*Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada*, 3ª época, nº 2, 1999, pp. 16-17).

5. Entiendo que esta juridicidad “transhistórica” es, al igual que la “socialidad”, una dimensión existencial del hombre-individuo en la que éste

cuentemente, tales derechos o posiciones jurídicas han de ser incorporados a todos los ordenamientos jurídicos históricos, por cuanto estos ordenamientos existen *por y para* los ciudadanos en cuanto hombres, en el sentido de que han sido creados por los propios hombres para definir sus posiciones jurídicas de “ciudadanos” dentro de la trama de las relaciones sociales de la respectiva comunidad política. Puede decirse, en consecuencia, que los derechos humanos son poderes jurídicos de autorrealización social, que corresponden a todos los hombres en cuanto tales (es decir, por el simple hecho de ser hombres). Y, en esa medida, puede y debe decirse también que han de serle reconocidos y garantizados de forma general y permanente por los diferentes ordenamientos jurídicos estatales<sup>6</sup>.

Estoy, pues, en la idea de que todos los *derechos* que son *humanos* en sentido fuerte son también una realidad propia y connaturalmente jurídica<sup>7</sup>. Si se afirmara lo contrario, habría que

está por ser racional (es decir, sujeto esencialmente abierto a la percepción consciente y reflexiva de la subjetividad del otro en cuanto distinto), con independencia de cuáles sean las concretas condiciones jurídico-políticas en que realiza su propio existir histórico. Y entiendo también que esa juridicidad humana connatural es la base en que se asientan los distintos ordenamientos jurídico-políticos particulares que han venido regularizando la vida social de los hombres a lo largo de la historia. En esa medida, he de entender asimismo que el sentido primario de lo jurídico no puede ser determinado por cada uno de los ordenamientos de las organizaciones políticas particulares, sino que reside en aquella realidad que es base y condición previa de esos ordenamientos.

6. Que eso llegue a ocurrir o no realmente dependerá de factores tan aleatorios como el grado de desarrollo ético de la humanidad o la actitud de los sujetos sociales que controlan el poder político-jurídico dentro de la respectiva comunidad.

7. Hay un caso en que la duda sobre el carácter meramente retórico o estrictamente jurídico de los derechos humanos suele plantearse con especial virulencia: el caso de los “derechos sociales”. Pienso, sin embargo, que, en relación con el problema que nos ocupa, estos derechos están en la misma posición que los “civiles y políticos”, debiendo ser considerados también, en consecuencia, como realidades radicalmente jurídicas por ser y en la medida

aceptar que no existe ninguna razón o argumento jurídico-político sólido<sup>8</sup> para exigir a las organizaciones políticas y a sus correspondientes gobiernos el reconocimiento y la protección de los derechos humanos en los ordenamientos jurídicos estatales, quedando sin fundamento el actual principio general de la exigibilidad extraterritorial de tales derechos<sup>9</sup>.

en que son “derechos humanos”. Por otra parte, puede afirmarse asimismo que el carácter de las disposiciones en que son proclamados los derechos sociales dependerá de la posición que tales disposiciones ocupen dentro del respectivo ordenamiento jurídico, por lo que, mientras que unas veces serán meras proclamas retóricas, otras tendrán el vigor jurídico de normas directamente aplicables.

8. Aquí el término “jurídico-político” tiene todo el rigor que le corresponde, pues no podrían ser suficientes las alegaciones de mera conveniencia moral que habría que formular, si se entendiera que los derechos humanos son simples valores, principios orientadores o “derechos morales”.

9. Parece claro que la caracterización y fundamentación iusnaturalista de los derechos humanos permite superar la mayor parte de las aporías a que, como ha señalado PÉREZ LUÑO (*Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución*, 5ª edic., Tecnos, Madrid, 1995, p. 516), se hallan abocadas las tesis positivistas. Resulta, en consecuencia, difícilmente comprensible la obsesión con que varias teorías fundamentadoras de los derechos humanos se esfuerzan por mantenerse alejadas de toda explicación que pueda ser calificada como iusnaturalista.

Por otra parte, la defensa del carácter jurídico primario de los *derechos humanos* obliga a evitar cualquier tipo de confusión conceptual entre esta categoría y la de los *derechos fundamentales*, en cuanto éstos sean entendidos como aquellos derechos humanos cuyo reconocimiento ha sido recogido en las leyes constitucionales del respectivo ordenamiento jurídico. Y pienso también que, si se reservara este último nombre para designar solamente a los derechos que (sean o no “derechos humanos”) han sido consagrados en las leyes fundamentales, desaparecerían algunas de las dificultades importantes con que tropieza en la actualidad la teoría general de los derechos humanos. En efecto, los “derechos fundamentales”, en cuanto herederos de los “derechos públicos subjetivos” del XIX [es decir, de aquellos derechos que las leyes del Estado –preferentemente la constitución– reconocían a los ciudadanos en virtud de una decisión de autolimitación de sus propias prerrogativas por parte de los poderes del Estado] sólo son fundamentales y sólo existen en la medida en que tales leyes los reconocen.



## 2. EL CARÁCTER DE LOS DOCUMENTOS QUE PROCLAMAN LOS DERECHOS HUMANOS: ¿RETÓRICA O DERECHO?

Cuando se intenta responder globalmente a la pregunta por el carácter de los documentos y disposiciones en que han sido y son proclamados los derechos humanos, es obligado anunciar desde el primer momento que su propia historia es un testigo irrecusable de que esos documentos y disposiciones han tenido en muchas ocasiones un valor simplemente retórico, mientras que en otras se han revestido del vigor de la normatividad jurídica. Así que (sintetizando la tesis que voy a desarrollar muy brevemente a continuación) ha de concluirse que los textos en que han sido y son proclamados los derechos humanos son, en parte, pura y simple retórica política y, en parte, normatividad jurídica en su sentido más propio y fuerte<sup>10</sup>.

Por otro lado, esta doble y contrapuesta virtualidad está presente, tanto en el ámbito de los documentos intraestatales de reconocimiento, como en el de los documentos supraestatales, tal como podremos comprobar a través del breve repaso que voy a realizar a continuación.

La distinción entre “derechos humanos” y “derechos fundamentales” ha sido reiteradamente destacada por A. E. PÉREZ LUÑO. Ver, por ejemplo, sus precisas acotaciones en *Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución*, cit., p. 515.

10. Resulta fácil admitir, en primer lugar, que los múltiples ensayos o proyectos de declaración surgidos dentro del marco de la elaboración doctrinal han tenido una influencia decisiva en los diferentes procesos de reconocimiento jurídico-político de los derechos humanos. Ha de admitirse también, sin embargo, que esas aportaciones doctrinales no pudieron sobrepasar en ningún momento el umbral de la filosofía o retórica política, con independencia del influjo que llegaron a tener finalmente en la legislación. En este punto es paradigmático el dato de la gran multiplicidad de sugerencias o proyectos que precedieron y acompañaron al proceso de elaboración de la finalmente proclamada *Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano*.



### A. Ambito de los textos intraestatales:

Como ustedes saben, dentro de los ordenamientos jurídicos intraestatales, el reconocimiento y la protección de los derechos humanos suele canalizarse a través de tres diferentes niveles de normación: el constitucional, el de la legislación ordinaria y el de la actividad jurisdiccional.

En relación con el nivel de la *regulación constitucional*, la doctrina ha experimentado una radical transformación a lo largo de la última centuria. Aunque las posiciones no están totalmente definidas, se sostiene generalmente que, hasta la segunda mitad de nuestro siglo<sup>11</sup>, la mayor parte de la doctrina especializada entendió que las disposiciones constitucionales en que eran proclamados los derechos humanos (o fundamentales) carecían de aplicabilidad jurídica directa<sup>12</sup>, por lo que, salvo en caso de ulterior desarrollo legislativo, sólo poseían la virtualidad propia de los principios ético-políticos generales. Eran, pues, casi siempre simple retórica política.

11. No hay acuerdo sobre cuál sea el momento preciso en el que se produjo el cambio de actitud. Según unos, a raíz de la Constitución de Weimar de 1919 (ver J. L. CASCAJO, *La tutela constitucional de los derechos sociales*, Centro de Estudios Constitucionales, 1988, p. 17), al menos en cuanto impulso iniciador y a pesar de la falta de acuerdo sobre su garantía constitucional, como ha señalado P. CRUZ VILLALÓN (*La formación del Sistema Europeo de control de constitucionalidad (1918-1939)*, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1987, pp. 223-227). Pero, según otros autores, ese cambio sólo podría datarse con posterioridad a la segunda guerra mundial. Ver, por ejemplo, las matizaciones de G. MORANGE ("Valeur juridique des principes contenus dans les Déclarations des Droits", *Revue de Droit Public*, 1945, pp. 248-251) o J. RIVERO ("Les droits de l'homme catégorie juridique?", en *Perspectivas del Derecho Público en la segunda mitad del siglo XX. Homenaje a Enrique Sayagués-Laso*, Instituto de Estudios de la Administración Local, Madrid, 1969, vol. III, pp. 23-28).

12. Sobre las distintas posiciones mantenidas en la doctrina constitucionalista francesa ver, por ejemplo, el resumen que ofrece A. E. PÉREZ LUÑO en su obra *Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución*, cit., pp. 71-77.

¿Qué ocurre ahora, cuando ya la doctrina constitucionalista defiende mayoritariamente la tesis de la eficacia jurídica directa de las disposiciones constitucionales? Veamos.

En la actualidad, suele insistirse<sup>13</sup> en la idea de que la proclamación constitucional de los derechos se produce casi siempre en diversos niveles normativos, según una combinación de métodos y técnicas de positivación que van desde la proclamación de grandes principios generales hasta la inclusión de una regulación casuística minuciosa<sup>14</sup>. Y se insiste también en que a cada uno de esos niveles normativos le corresponde un diferente vigor o normatividad jurídica.

Así, parece evidente que los “principios programáticos” y los “principios para la actuación de los poderes públicos” tienen un marcado carácter retórico y un nivel muy bajo de normatividad jurídica directa, de suerte que su importancia radica sobre todo en sus virtualidades filosófico-políticas. A su vez, las disposiciones que se remiten a un desarrollo normativo posterior quedan situadas en una zona intermedia, puesto que, sin tener una efectividad jurídica plena (ya que la subordinan en buena medida al desarrollo legislativo posterior), están dotadas de los rasgos básicos de

13. Ver, por ejemplo, A. E. PÉREZ LUÑO, *Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución*, cit., pp. 66-67.

14. Así, por ejemplo, A. E. PÉREZ LUÑO (loc. cit.), analizando la Constitución española de 1978, ha distinguido “cinco instrumentos distintos de positivación”: los *principios constitucionales programáticos* del Preámbulo [1], los *principios constitucionales para la actuación de los poderes públicos* [2] de los arts. 9.2, 10, 39-52 y 129.2, las *normas que remiten a un desarrollo posterior en la legislación ordinaria* [3] y que constituyen, por tanto, una regulación incompleta (como el art. 17.4 –habeas corpus–, el 18.4 –limitación del uso de la informática–, el 20.3 –organización y control de medios de comunicación social–, el 24.2 –no declarar sobre presuntos hechos delictivos–, el 28.2 –huelga–, el 29 –petición–, el 30.2-4 –servicio militar, objeción de conciencia y otros derechos y deberes cívicos–, el 35.2 –estatuto de los trabajadores–, el 36 –colegios profesionales–, el 37 –convenios y conflictos laborales–, el 105, el 125 y el 129.1), las *normas específicas o casuísticas* [4] y las *normas de tutela* [5], como los arts. 53 y 54 o el 161.1.a.

la juridicidad positiva. Y sólo las “normas específicas” (o casuísticas) y las “normas de tutela” poseen una normatividad jurídica directa, estando casi siempre respaldadas por la posibilidad de exigir su aplicación por la vía jurisdiccional.

Resulta, pues, patente la imposibilidad de afirmar tajantemente y con alcance general que todas las disposiciones constitucionales reconocedoras de derechos humanos tienen el carácter propio de la normatividad jurídica. Ha de reconocerse, por el contrario, que sólo algunas realizan una normatividad jurídica plena. Otras se adscriben con toda claridad al territorio de la retórica política. Y, por fin, otras se mueven en una zona de tránsito entre la retórica política y la plena juridicidad.

Pero eso no ocurre en el nivel de la legislación ordinaria o en el de la actividad jurisdiccional.

En efecto, en el nivel de la *legislación ordinaria*, las cosas parecen estar bastante claras. No se aprecia ninguna razón convincente para dudar de que la totalidad de las disposiciones legislativas reconocedoras de derechos constituyan auténticas normas jurídicas (sean completas, sean incompletas), salvo en el supuesto de que su propia formalidad o su contenido regulativo entre en conflicto frontal con alguna norma constitucional.

A su vez, en el nivel de la *actividad jurisdiccional*, resulta también manifiesto que aquellos actos y decisiones de los órganos jurisdiccionales propiamente dichos que recaen sobre el ejercicio de los derechos humanos tienen un evidente carácter jurídico.

Hay, sin embargo, otros órganos que, no siendo jurisdiccionales en sentido estricto y aunque desempeñen una importantísima actividad promocional de los derechos humanos (como el Defensor del Pueblo), están capacitados solamente para adoptar iniciativas que tienen en la mayoría de los supuestos un simple carácter jurídico-político o meramente político.



## B. *Ámbito de los textos supraestatales:*

En el ámbito del Derecho supraestatal (el propiamente internacional general o el de las distintas organizaciones supraestatales regionales), el reconocimiento y la protección de los derechos humanos se han venido produciendo a través de dos vías complementarias que se sitúan en dos diferentes niveles de juridicidad y que, por tanto, es inevitable examinar por separado. Esas dos vías son la de las *declaraciones* y la de los *convenios* o pactos<sup>15</sup>.

Pues bien, en mi opinión, la vía de las “declaraciones”<sup>16</sup> tiene un nivel mínimo de juridicidad y un carácter manifiestamente retórico (careciendo, en consecuencia, de eficacia jurídica directa y propia), a pesar de que algunos autores hayan defendido con inusitada energía la tesis contraria<sup>17</sup> y otros hayan apostado por una vinculatoriedad jurídica indirecta<sup>18</sup>. En cambio, la vía de los

15. Se habla solamente del marco jurídico-político de acción, puesto que resulta evidente que, en el ámbito de las actividades sociales, económicas, sanitarias, tecnológicas, etc., la iniciativa de las organizaciones supraestatales se ha plasmado en una rica variedad de “medidas promocionales complementarias” que ya he indicado en otras ocasiones. Ver, por ejemplo, el libro *Los derechos económicos, sociales y culturales. Análisis a la luz de la teoría general de los derechos humanos* (Universidad de León, 1993, pp. 170-171) o el artículo “Los derechos económicos, sociales y culturales en la Declaración Universal de 1948” (en el volumen colectivo *Jornadas conmemorativas del 50 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos*, U.N.E.D., 1999, p. 41).

16. No sólo las provenientes de organismos que carecen de personalidad jurídica internacional (como la *Declaración Islámica Universal de los Derechos del Hombre* –París 1981–, del Consejo Islámico para Europa), sino también aquellas otras que han sido aprobadas por organismos dotados de esa personalidad (como la *Organización de Estados Americanos*, la *Organización de las Naciones Unidas*, el *Consejo de Europa* o la *Organización para la Unidad Africana*).

17. Por ejemplo, R. CASSIN (“La Déclaration universelle des droits de l’homme”, en *Recueil des Cours*, Académie de Droit International, La Haye, II, 1951, pp. 237 ss.

18. Referencia sumaria en A. E. PÉREZ LUÑO, ob. cit., pp. 79-81.



“pactos” cuenta, en principio, con una elevada densidad jurídica, de modo que las correspondientes disposiciones han de ser consideradas como verdaderas normas del Derecho internacional, constituyendo una patente realidad jurídica, sin perjuicio de que tengan una mayor o menor plenitud en función del respectivo nivel de ejercitabilidad jurisdiccional.

El panorama es, pues, lo suficientemente diversificado como para que, a la hora de intentar dar una respuesta satisfactoria a la pregunta por el carácter retórico-político o jurídico de los derechos humanos, resulte imprescindible introducir múltiples distinciones y matices. Yo he intentado hacerlo ya en los apresurados análisis que acabo de exponer ante ustedes. Ahora sólo me resta insistir, a modo de recordatorio, en los siguientes *postulados* básicos:

1. Todos los derechos de la persona que puedan ser caracterizados como “derechos humanos” propiamente dichos *son derechos* en sentido primario y fuerte.

2. No todos los derechos incluidos habitualmente en la categoría “derechos humanos” son *derechos humanos* en sentido propio y estricto. Algunos de esos derechos son simples desdoblamientos o reiteraciones de otros más básicos y generales<sup>19</sup>, otros son derechos meramente culturales [es decir, derechos de raíz y fundamento estrictamente sociocultural]<sup>20</sup> y otros son

19. Como la “libertad religiosa” y la “libertad de creencia y conciencia”, que son una simple manifestación de la básica “libertad de pensamiento”. (Esta observación fue hecha ya en mi estudio “Dimensión científica de los derechos del hombre”, en el libro colectivo *Los Derechos Humanos. Significación, estatuto jurídico y sistema*, Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 1979, pp. 132-133).

20. Estos no parecen pertenecer al hombre en cuanto tal, sino que le son reconocidos a los individuos por consideración a determinadas posiciones que ocupan dentro de los esquemas organizativos de las respectivas sociedades de cada época, como ocurre en el supuesto de la mayoría de los denominados “derechos del trabajo” (el propio derecho al trabajo, el derecho a aviso previo

simples deseos o aspiraciones coyunturales de bienestar<sup>21</sup>.

3. Todas las disposiciones que proclaman *derechos humanos* propiamente dichos participan de la juridicidad transhistórica de esos derechos; son, por tanto, desde ese punto de vista y en ese ámbito, una realidad jurídica estricta, aunque refleja.

4. No todas las disposiciones de los ordenamientos jurídicos históricos que proclaman *derechos humanos* tienen, dentro de esos ordenamientos, el carácter de genuinas normas jurídicas. Pero la mayoría de esas disposiciones sí lo tienen y, en consecuencia, son directamente aplicables.

Gracias por su atención. Espero no haberles provocado en exceso.

en caso de cese, el derecho a la protección contra el desempleo, el derecho a una jornada laboral limitada, el derecho al descanso diario, el derecho al descanso semanal o el derecho a vacaciones anuales...). Y, en esa medida, son derechos que se definen por su relación inmediata con esa determinada situación sociocultural en la que la vida de la mayoría de los hombres depende de un trabajo asalariado, de suerte que carecen de la radicalidad y universalidad de los derechos humanos propiamente dichos. (He hecho ya un análisis más detallado de esta dependencia en el ya citado estudio "Dimensión científica de los derechos del hombre", pp. 124-126).

21. Como el derecho a una mejora continua de las condiciones de existencia —art. 11 del *Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales*— o el derecho a beneficiarse de unos servicios sociales adecuados —art. 14 de la *Carta Social Europea*—.